

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
11 de junio
de 2020

Año XXXVII
Nº 1.597

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

La función política
del rescate de
(los acreedores)
de Vicentín



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

SIN SALARIO, TRABAJO, SALUD Y ALIMENTOS NO HAY CUARENTENA

16 DE JUNIO

JORNADA NACIONAL DE LUCHA



La intervención temporaria de Vicentín cumple la función de rescatar las deudas del vaciado grupo económico, pero también de ocultar la realidad que sufren los trabajadores del país.

El gobierno posa de audaz defensor de la soberanía, cuando los acreedores de la deuda externa le están arrancando concesiones millonarias en la mesa de negociación.

Mientras el impuesto a las grandes fortunas se envió al cajón, el Ejecutivo envió un proyecto de ley de suspensión de la movilidad jubilatoria por un año entero. Este año, los jubilados ya perdieron la mitad de la movilidad que les hubiera correspondido según la última fórmula.

En tanto, se prorroga el acuerdo UIA-CGT-gobierno para seguir con las suspensiones con rebaja de salarios, violando la legislación laboral a decretazo limpio.

Con la burocracia sindical adicta, aprovechando la cuarentena para jugar incluso más abiertamente su rol de auxiliar de los patrones.

Ya se han producido 150 mil despidos y se pronostica que la cifra pueda triplicarse o quintuplicarse en el año. Los precios de alimentos suben violentamente, muy por encima del promedio de inflación.

El gobierno sigue retaceando alimentos para los comedores populares. La segunda cuota de la IFE es un monto miserable y siguen quedando millones afuera.

Es en este cuadro que se torna tan importante la convocatoria resuelta por el Plenario del Sindicalismo Combativo, a marchar por los reclamos obreros a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país.

Las patronales y los gobiernos no han esperado el fin de la cuarentena para

avanzar contra los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y jubilados.

Una movilización central, que unifique las luchas en curso, nos permite hacer escuchar nuestra voz.

Allí estarán los docentes combativos de todo el país. Estarán las luchas del momento, como el frigorífico Penta, La Nirva o los mineros de Andacollo. Los luchadores del Polo Obrero y el frente piquetero. Los jubilados que se organizan en la combativa Córdoba.

En cada provincia se realizan reuniones preparatorias para extender la jornada de lucha.

Llevemos la convocatoria a cada lugar de trabajo, para irrumpir con los reclamos de nuestra clase trabajadora en el escenario nacional.

¿Expropian a Vicentin para pagar la deuda?

La agencia Bloomberg acaba de brindar una información importante que permite analizar las razones que llevaron al gobierno a decidir la intervención de Vicentin y mandar al Congreso un proyecto de expropiación. Según Bloomberg (*Infobae*, 9/6) el gobierno argentino ha propuesto a los fondos de inversión entregar un bono atado a las exportaciones agrícolas. Este “endulzante” permitiría cerrar la brecha que aún separa a la propuesta presentada por Guzmán de las pretensiones de los principales acreedores del país. De acuerdo con los cálculos realizados por la propia agencia, con este bono atado a las exportaciones agrícolas, la quita de capital -que ya era muy reducida en la propuesta original presentada por el gobierno- quedaría virtualmente eliminada. Además, se reduciría el período de gracia a 2021, por lo cual el gobierno actual deberá asumir el pago de la deuda a partir del próximo año. Así las cosas, la reestructuración de la deuda terminaría en un gran triunfo de los fondos de inversión y en un arruque completo del gobierno de los Fernández.

La idea de emitir un bono atado a las exportaciones agropecuarias surgió luego de que los BlackRock y compañía rechazaran recibir uno atado al crecimiento del PBI. Los fondos de inversión dijeron que Argentina, en el pasado, ha manipulado varias veces las estadísticas de crecimiento para alterar el pago de dicho cupón. Para superar ese rechazo, el gobierno argentino habría propuesto que las estadísticas de crecimiento sean controladas por el FMI pero, sin embargo, no lograron convencer a los acreedores. El PBI es un flujo que puede alterar-



se de diversos modos, por ejemplo, modificando el tipo de cambio. En cambio, las exportaciones, al medirse en la misma moneda que se realizan efectivamente las operaciones comerciales, ofrecen estadísticas más confiables.

Para los acreedores internacionales recibir un bono atado a las exportaciones agrícolas implica un triunfo enorme. Significa hacerse del control de lo que en la actualidad representa casi la única fuente de ingreso de divisas que tiene el país. Esto es así, sobre todo, luego del derrumbe del precio del petróleo, que ha sacado a Vaca Muerta de juego. Recordemos que los Fernández se habían esperanzado en que la explotación de Vaca Muerta iba a permi-

tir superar la estructural falta de dólares que tiene el país y poder pagar la deuda por esa vía. Nada de esto sucedió.

Resumiendo, para hacer frente a los pagos de deuda, el gobierno necesita echar mano directamente a las exportaciones agropecuarias. La intervención de Vicentin es un paso en esa dirección. Es sabido que esta empresa venía desviando las exportaciones de sus plantas de Santa Fe por Paraguay, con el propósito de evitar el pago de impuestos y hacerse directamente de las divisas. Ahora, mediante la intervención, el gobierno pretende hacerse de esa fuente de dólares para poder hacer frente al pago de la deuda. Así sucedió también en el pasado, cuando

el gobierno de Cristina Kirchner chocó con el capital agrario, para hacerse de los dólares para pagar la deuda y subsidiar a sectores del propio capital.

En la conferencia de prensa, el gobierno habló de que Vicentin podría ser usada como “empresa testigo” para poder intervenir en el mercado de granos y sus derivados, forzando a que se realicen exportaciones que están frenadas a la espera de una nueva devaluación. En comparación con el mismo período del año pasado, dichas exportaciones cayeron un 29%. Para ello, el único recurso que tiene una empresa aislada para lograrlo es ofrecer a los productores un precio superior de compra que el resto de las exportaciones.

tadoras. Sin embargo, una medida así implicaría reducir el margen de beneficio de la propia empresa y, por otro lado, incrementar el costo interno de los alimentos que se consumen dentro del país. O sea, todo lo contrario de “defender la mesa de los argentinos”.

Como se ve, las alusiones a la “soberanía alimentaria” son un engaño para entretener a la platea. Los intereses que mueven al gobierno están dictados por un creciente sometimiento a los dictados de los acreedores internacionales. Entre ellos, a los acreedores internacionales de la propia Vicentin, que acaban de emitir un comunicado saludando la intervención, porque ven en ella la garantía de pago que no le ofrecía la empresa, que estaba en concurso de acreedores. Entre estos se destacan el Banco Mundial, el francés Credit Agricole y el ING de Tokio.

Para que la intervención y expropiación de Vicentin sea una medida progresiva requiere que forme parte de una política opuesta a la del gobierno de los Fernández. En primer lugar, que esa expropiación sea sin indemnización alguna a los bancos acreedores. Segundo, que sea parte de un plan económico de los trabajadores que parta de desconocer la deuda usuraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior y todo el complejo agroindustrial para utilizar esos recursos como parte de un plan de desarrollo nacional. Con estos planteos, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentarán su propio proyecto en el Congreso, para confrontar con el gobierno y la oposición derechista.

Gabriel Solano

Avanza la campaña por el impuesto a las grandes fortunas

Avanza la campaña por el proyecto del Frente de Izquierda, que establece un gravamen progresivo a las grandes rentas, fortunas y a toda la clase capitalista, que podría recaudar más de 15.000 millones de dólares.

La asamblea de Ademys, de los docentes de Capital, se pronunció por el proyecto, lo mismo que el plenario de delegados del Suteba Matanza, con 113 votos a favor y tres en contra. En ambos casos, el planteo va unido a la adhesión militante a la movilización del 16, del Plenario Sindical Combativo.

Por otro lado, progresa la campaña en la base de diferentes gremios, con 1.500 adhesiones de delegados y activistas del movimiento obrero de todo el país.

Entre los gráficos, por ejemplo, en Morvillo, el proyecto gana importantes adhesiones. En el Sutna (Neumáticos), el pronunciamiento del secretario general, Alejandro Crespo, se suma al de otros importantes directivos del sindicato.

Entre los trabajadores de la salud de la Capital, el proyecto circula con numerosos compañeros que difunden el pronunciamiento, asociando la lucha por la defensa de la salud pública y las condiciones de trabajo a la campaña por un impuesto a las grandes fortunas que afecte a los grupos que, a decir de un compañero: “hicieron su fortuna mediante los fraudes y el trabajo esclavo”.

En Neuquén, además de im-

portantes pronunciamientos docentes de Aten, avanza el debate con petroleros y mineros. En Entre Ríos avanza con empuje la campaña entre docentes de Agmer.

Entre la juventud comenzó una campaña que abarca a centros de estudiantes terciarios y universitarios y pronunciamientos de numerosos estudiantes.

En Salta avanza, además, el proyecto presentado por Claudio del Plá en la Legislatura provincial. En el Chaco, una provincia con pico de contagios y condiciones sociales explosivas, la Cámara de Diputados se sigue negando a tratar el proyecto provincial presentado por Aurelio Díaz, del Partido Obrero.



Con la movilización del 16, el Plenario Sindical Combativo ganará la calle por todos los reclamos del movimiento obrero. La campaña por el impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, por el impuesto presentado por el FIT-Unidad, asociado al no pago de la deuda y a

una reorganización económica en favor de los trabajadores, es una vía para obtener los recursos necesarios para defender la salud, las fuentes de trabajo y los salarios para que la crisis la paguen los capitalistas.

Juan García



La función política del rescate de (los acreedores) de Vicentin

Oponemos la estatización sin pago bajo control obrero, como parte de un plan económico de los trabajadores

NÉSTOR PITROLA

Pocos días como éstos han servido para retratar el carácter de “bonapartismo en tiempos de default”, como definió tempranamente *Prensa Obrera* al gobierno de Alberto y Cristina Fernández. La impactante intervención a la quebrada Vicentin es ella misma una viva expresión de ello, además de su función política en el conjunto de la política que improvisa el gobierno.

Una ayuda para comprenderlo nos la da el comunicado del Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de la firma agroexportadora por unos 500 millones de dólares que expresa “disposición al diálogo constructivo con las autoridades para discutir la regularización de la deuda... que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía” (*Ambito*, 9/6).

La intervención y posterior expropiación del conjunto del paquete accionario de Vicentin SAIC significa que el Estado se hace cargo del pasivo total de la convocatoria de acreedores, unos 1.400 millones de dólares que pasan a engrosar el endeudamiento público argentino, mientras se proclama el carácter impagable de ese endeudamiento. En tanto, la expropiación será onerosa, como lo fue la de YPF, y por lo tanto estará sujeta al largo proceso judicial que ya mismo comienza, donde las familias Padoán-Nardelli cumplirán el papel de Repsol, que se alzó con un botín al cabo de pocos años, de la mano de Kicillof.

El argumento “nacional y popular” de la “soberanía alimentaria” no ha podido ser explicado en los largos reportajes defensivos de un Alberto Fernández empeñado en explicar que es un rescate de tipo excepcional. De qué hablan Sagasti, Kulfas y Fernández no se sabe, porque Argentina produce alimentos para centenares de millones de personas, pero su problema es la falta de soberanía popular sobre las fuerzas productivas de esos alimentos y de su distribución. De tal suerte que el hambre ha golpeado a la puerta de por lo menos 12 millones de personas anotadas para cobrar la miserable IFE.

En cuanto a la intervención en el mercado de granos con una “firma testigo”, que algunos delirantes compararon con una Junta Nacional de Granos, no parece mover el amperímetro de un negocio agroexportador y de biodiesel donde operan unas 35 empresas. Por otro lado, si se pretende un precio sostenido como los que garantizaba la Junta de Granos, entonces estaríamos ante una política de encarecimiento aún mayor de los alimentos, cuyos precios siguen por el ascensor. Respecto de la exportación de granos, aceites y biodiesel, Vicentin abarca apenas un 9% de la exportación dominada por Dreyfus, Bunge, Cargill, ADM Agro y otros pulpos internacionales, aunque haya estado en el sexto lugar en 2018 y en el cuarto en 2019, antes de su derrumbe en 2020.

Lo mismo vale para el ingreso de divisas,

porque aunque se usara Vicentin para mostrar las maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación de exportaciones, algo que ya está en manos del Banco Nación y la Justicia en este caso, no significa que se termine con esa práctica por parte del resto, tampoco con la retención de dólares de exportaciones, como tampoco con los silo bolsos que se usan para forzar devaluaciones contra el pueblo argentino. No tiene Vicentin esa capacidad aunque se avanzara en su estatización que, como veremos, no es tal.

El gobierno anunció la formación de un Fondo Fiduciario que estará gerenciado por YPF Agro. O sea que no es una empresa del Estado, tampoco una sociedad de Estado de carácter público, como Trenes Argentinos que opera con privados asociados, sino que sería un híbrido capitalista bajo gerenciamiento de una sociedad anónima que opera en la Bolsa de Nueva York bajo sus normas y contraloría, como es YPF SA de mayoría accionaria estatal.

La intervención es por 60 días, habrá que examinar la ley de expropiación cómo es, pero ya podemos ver dos cosas muy importantes. Primero que solo se estaría expropiando la parte del grupo que está en la convocatoria y no la llamada Vicentin Family Group, donde Vicentin está asociado con la suiza Glencore. Entonces podrían quedar afuera de las medidas del gobierno importantes frigoríficos como Friar, participe del exclusivo club de la cuota Hilton; la Algodonera Avellaneda con plantas en tres provincias o la bodega Vicentin Family Wines de vinos de media y alta gama.

El otro tema que está en las posibilidades es que se llegue a un acuerdo con Glencore como socia, de tal suerte que pase a jugar el rol de George Soros y los demás fondos de inversión y accionistas privados de YPF SA. Una variante que revela *Ambito Financiero*.

Como se puede apreciar, estamos lejos de una nacionalización que empieza un rumbo estatista, como agita la derecha y la Sociedad Rural. El propio frente patronal se ha dividido con un explícito apoyo de José Urtubey, de la Unión Industrial, la celebración de la Federación Agraria y un apoyo más condicionado de Coninagro.

La función política

Hasta aquí hemos visto el carácter mismo de las medidas respecto de Vicentin. Pero el volantazo nac&pop tiene un parecido importante con la crisis de la 125. No está opuesto al objetivo central del gobierno en lo económico, que es el rescate de la deuda que se negocia ya febrilmente en el último tramo de la reestructuración. Todo lo contrario, está al servicio de la reestructuración, aún para el caso de las vidriosas aspiraciones de mejorar el ingreso de divisas.

Pero la cosa va más allá. Varios medios han confirmado lo de la agencia financiera internacional Bloomberg, publicado anoche (ver artículo). En la mesa de negociación del can-

je, donde Argentina prepara la tercera propuesta, cediendo cada día algo más, habría sido rechazada la oferta de cupones de crecimiento del PBI con la que tan bien les fue a los acreedores del canje de Lavagna. En su lugar se estaría discutiendo un bono ligado a las exportaciones agrarias. Léase bien esto. Se trata de colocar al arbitrio del capital financiero internacional, justamente la joya que le queda al capitalismo argentino, que son sus exportaciones agropecuarias, desde luego con su bagaje de primarización, de paraíso de los agrotóxicos y los negocios de Monsanto, de trabajo en negro y superexplotación del obrero rural, de puertos privados y hasta contrabandos, de dólares que quedan en el exterior mediante maniobras de distinto tipo, de eternos conspiradores devaluacionistas, como están operando ahora mismo.

Un bono de este tipo haría de la reestructuración argentina un verdadero modelo colonial de garantía de apropiación de riquezas del suelo del tipo del endeudamiento contra las reservas petroleras. En ese sentido, la injerencia de YPF Agro no es menor, porque ese departamento de YPF actúa precisamente canjeando gasoil por semillas.

Una primera función política del rescate de Vicentin quebrada es, entonces, hacer pasar una monumental entrega que se prepara cediendo a toda la extorsión del capital y las potencias internacionales en la reestructuración de deuda. Felipe Solá acaba de agradecer “el apoyo norteamericano” y del FMI a la propuesta argentina. Sin pudor, mientras el mundo se estremece y se moviliza ante las movilizaciones antirracistas del pueblo trabajador norteamericano, que no merecieron una sola palabra de apoyo del gobierno argentino. Se estaría achicando el plazo de gracia, diseñando un bono por los intereses devengados en ese plazo, reduciendo o eliminando la quita de capital, aumentando los intereses y acortando los vencimientos de los bonos de canje.

Nada gratis para los trabajadores

Mientras se agita la maniobra de rescate de Vicentin y sus acreedores como una herramienta nacional y popular, llega al Congreso el proyecto de ley de suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el año que viene (que, desde luego, rechazaremos impulsando una movilización de trabajadores y jubilados contra él). Se prorroga por 60 días el pacto UIA-CGT-gobierno para seguir con las suspensiones con rebaja de salarios y para hacerlo posible se prepara un decretazo contra la ley de Contrato de Trabajo que fija en 75 días el plazo máximo de las suspensiones por fuerza mayor. Se decretó, para este junio, una reducción a la mitad de la movilidad jubilatoria. Se han producido 150 mil despidos en el primer semestre y ante la depresión económica se pronostican entre 400 y 800 mil para todo el año, transformando en papel mojado los decretos de prohibición y doble

indemnización. Los precios de los alimentos debutaron, el lunes 8 de junio en los hipermercados, con aumentos de hasta el 15%.

Claro, la montaña de emisión monetaria ha ido en parte a la especulación con el dólar metiendo presión sobre los precios, especialmente de los alimentos. Aunque esa emisión no ha sido tanto para enfrentar la pandemia como para sostener el pago de la deuda en pesos que no se refinancia y que solo en junio tiene vencimientos por otros 350 mil millones de pesos. Esta situación será explosiva a medida que se habilitan actividades económicas en todo el país, aunque sea en el marco de aguda recesión. La inflación esperada para el caso de que se evite una hiperinflación, no baja de 40%, cuando en el primer semestre apenas pasaría del 10%.

Discutamos una salida de los trabajadores

Esto hay que darlo vuelta como una media. Los propios trabajadores de Vicentin tienen que exigir continuidad incondicional de salarios sin las rebajas y suspensiones que vienen sufriendo, el otorgamiento de sus aumentos paritarios, como el previsto en Aceiteros y de las condiciones de convenio. No acordamos con el reclamo de la Federación de Aceiteros de un lugar en el Directorio (¿del fideicomiso?), se trata de una política largamente fracasada. El movimiento obrero debería contribuir planteando la estatización sin indemnización alguna de los activos de todas las compañías y grupos, propios y asociados de Vicentin, sean parte del concurso de acreedores o no, abriendo los libros de las compañías al control obrero y comenzando una gestión de los trabajadores del grupo. No es la política de las burocracias sindicales en todas sus alas, incluido Aceiteros, absorbidas por la movida oficial. Esta política será parte de los planteamientos del Plenario Sindical Combativo que se moviliza el 16 próximo en todo el país.

Una estatización de este tipo debería estar acompañada del control por parte del Estado del comercio exterior y una banca pública única que verdaderamente sirvan para terminar con las maniobras devaluacionistas y la fuga de capitales, así como extender una verdadera soberanía a la nacionalización de los hidrocarburos y compañías energéticas.

Al servicio de esta lucha política, Romina Del Plá es cabecera de un proyecto del Frente de Izquierda que opondremos en Diputados a la estatización trucha del gobierno de los Fernández. El mismo papel cumple el proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda, que ya reúne miles de firmas de apoyo entre activistas del movimiento sindical, de la cultura, de los jubilados y del movimiento estudiantil.

El 16, todos, desde cada lugar del país, en la calle o en la movida virtual, participemos de la jornada nacional de lucha del Plenario Sindical Combativo.

Lanzamos la campaña financiera de invierno

Por una salida obrera. Que la crisis la paguen los capitalistas

El Partido Obrero resolvió lanzar su Campaña Financiera y convocar a miles de simpatizantes a colaborar en la construcción de una salida obrera e independiente a la creciente crisis.

Con la pandemia y la cuarentena, el gobierno nacional profundizó una política de rescate a los capitalistas, y su más clara expresión es la orientación que está siguiendo con el pago de la deuda: garantizar su pago a toda costa. En cambio, la orientación que se tiene hacia los trabajadores es toda la contraria: suspensión de la movilidad jubilatoria por decreto, extensión de las rebajas salariales y suspensiones mediante el acuerdo tripartito de la UIA, CGT y gobierno. La prolongación del pago de las ATP para pagar los salarios en ayuda a las patronales también contrasta con la demora en el pago de la IFE y la asistencia a comedores populares y los sectores más relegados de los barrios. Despidos, suspensiones, rebajas de salario y jubilaciones han sido la regla de esta cuarentena. Los medios incluso insisten en que se realizó

una reforma laboral de hecho en los términos solicitados por los capitalistas, por el avance en las medidas de ataque a las conquistas obreras y la flexibilización laboral en la mayoría de los gremios. En la medida que avanzó la pandemia, el gobierno fue flexibilizando la cuarentena imponiendo de hecho las nuevas condiciones de las patronales.

Pero también avanzó la lucha de los trabajadores y de los sectores explotados. Desde el primer día se hizo sentir el reclamo de los barrios anticipando las catástrofes de Villa Azul y la Villa 31. El Polo Obrero estuvo a la cabeza de las denuncias por el desamparo en las barriadas de todo el país, los negociados con la comida y la falta de solución por parte de los gobiernos provinciales y nacionales. Las jornadas nacionales del Frente de Lucha hicieron de la consigna "Con hambre no hay cuarentena" una demostración de la realidad más general de nuestro país.

En el último período, las luchas obreras se fueron repitiendo día a día. La flexibilización brutal de los

trabajadores de la salud, de los docentes en las escuelas y universidades, de los trabajadores de las APPS, el vaciamiento de las empresas mineras y petroleras, u otras como el frigorífico Penta, que fueron brutalmente reprimidas. Sólo por mencionar algunas que se fueron dando en todo el país y que tuvieron en Córdoba, hace unos días, su epicentro con paros y movilizaciones masivas. De acuerdo con estas luchas -y para impulsar su coordinación y triunfo-, los diferentes gremios que se organizan en el Plenario del Sindicalismo Combativo -como el Sutna, la AGD-UBA, el Suteba Matanza, entre otros- realizaron un plenario con cientos de activistas y luchadores de todos los rincones del país y convocaron a una jornada nacional de lucha el 16 de junio que viene.

Se destaca en el último tiempo la lucha que dio el movimiento de mujeres. El Ministerio de la Mujer dio continuidad a la política de desamparo del Estado y la violencia de género se acrecentó durante estos meses. Por eso, el Plenario de



Trabajadoras impulsó activamente, a pesar de las restricciones de la cuarentena, las movilizaciones previas al "Ni una menos" y la propia del 3J en su quinto aniversario en Plaza de Mayo.

Las luchas y los reclamos se extendieron por todo el país y nuestra prensa dio cauce a cada reclamo y denuncia, creciendo en su difusión y rol organizador de las luchas, como se demostró en las acciones represivas en Chaco y en varias provincias.

Nuestro partido, sumado a su participación activa en todas estas luchas, empezó a desarrollar la campaña por un verdadero impuesto a las grandes fortunas, en contraposición a los fuegos de artificio que lanzó el gobierno, cuyo proyecto ni siquiera presentó todavía. De la misma manera que estamos impulsando el rechazo al pago de la deuda a nivel nacional, lo estamos haciendo en cada provincia, para detener el ajuste

y la profundización de la carestía que imponen los gobiernos sin importar su signo político. El resultado político de cada lucha debe servirnos para impulsar la intervención política independiente de los trabajadores, combatiendo por imponer que la crisis la paguen los capitalistas.

Llamamos a aportar a nuestra Campaña Financiera para impulsar cada lucha y cada acción de los explotados en la construcción de una salida propia a la crisis. Con la convicción que tenemos que construir una acción colectiva independiente, de acuerdo con un programa que defienda los intereses de la clase obrera y favorezca la construcción de agrupaciones en cada gremio, así como fortalecer cada lucha que están dando los luchadores en todo el país.

¡Sútese a la campaña financiera compañero!

Emiliano Fara

POLÍTICAS ■

La revelación de carpetas y carpetas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Mauricio Macri, por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, combinada con la investigación del juez Villena, que también investiga el espionaje, volvieron a poner de manifiesto una realidad archiconocida: la dependencia del Estado, y del poder político, del aparato conspirativo montado en la AFI (exSide), para operar ampliamente contra dirigentes políticos oficialistas y opositores, organizaciones sociales y de trabajadores, y periodistas, entre otros.

Las denuncias de Caamaño fueron presentadas frente al juez Martínez de Giorgi en la misma semana que, por su parte, el juez Villena llamó a Cristina Kirchner (y otros dirigentes) a notificarse de la información del expediente que la involucra como objetivo del espionaje. Las pruebas de Caamaño fueron aportadas, además, frente a la bicameral de inteligencia que preside Leopoldo Moreau. El objetivo es evidente: golpear al macrismo con las denuncias de espionaje, provocando un largo proceso donde será expuesto el método de funcionamiento de la AFI contra una amplísima gama de personalidades, incluso pertenecientes al gobierno macrista, como Horacio Rodríguez Larreta,

Espionaje: golpe al macrismo, continuidad de los servicios

Los aparatos de conspiración contra los trabajadores siguen intactos

ta, Emilio Monzó o Nicolás Massot.

El golpe al macrismo busca horadar, además, las grietas que recorren a la oposición de derecha, que separan a Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Los últimos quedan en evidencia en la denuncia como promotores de una operación de espionaje contra un arco amplio de personalidades del propio Cambiemos. Rodríguez Larreta declaró tratando de separar a Macri de las denuncias de espionaje. El espionaje denunciado abarca a una cantidad muy amplia de dirigentes políticos y periodistas. Abarca también, como ha sido una constante, a dirigentes y organizaciones sociales y a la izquierda. Se afirma el intento de infiltrar el MST Teresa Vive y se han presentado informes de la actividad del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, en un plenario en el Hotel Bauen.

Pero la denuncia del gobierno tiene patas muy cortas. No solamente porque en sus cortos meses de mandato el gobierno de Fernán-

dez quedó expuesto varias veces por operativos de espionaje: la primera, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, declarando la realización de "ciberpatrullaje"; y la segunda, con la Gendarmería, realizando operativos de espionaje contra los mineros de Andacollo. La revelación de los alcances del "espionaje macrista" tampoco puede hacer olvidar el espionaje kirchnerista, con el Proyecto X a cargo de Gendarmería, la larga convivencia con Jaime Stiusso o la rehabilitación de César Milani para llevar adelante tareas de inteligencia desde el Ejército.

Lo fundamental es que el aparato de espionaje está enquistado a fondo en el aparato del Estado. Todas las investigaciones en curso, que involucran a la Side/AFI bajo los gobiernos de todos los signos políticos, han puesto de manifiesto los vínculos recurrentes del aparato de espionaje con todas las fuerzas de seguridad. Ni hablar de los juzgados federales e incluso la Corte Suprema, de la cual depende la oficina de escuchas. Los

jueces federales se apoyan en forma permanente en el aparato de espionaje en forma "legal" y han sido, históricamente, un punto de apoyo para el espionaje "ilegal". El entrelazamiento alcanza al Congreso de la Nación, cuya comisión de seguimiento parlamentario de la actividad de inteligencia ha sido históricamente un cero a la izquierda. Y, por supuesto, al Poder Ejecutivo, responsable máximo de la continuidad de la estructura del espionaje.

En relación con esta situación, las denuncias de espionaje blanquean la continuidad de la acción conspirativa de los servicios de inteligencia. Se presenta al espionaje "ilegal" como un exceso, materia de investigación judicial, incluso cuando es responsabilidad directa del poder político. Mientras la Justicia investiga y el Parlamento discute, la actividad de los servicios continúa. Se presentan denuncias judiciales o parlamentarias, pero ninguna medida política destinada a dismantelar esta estructura, cuya acción contra

las libertades democráticas ha quedado expuesta una y mil veces. Su desmantelamiento está por fuera de las perspectivas del gobierno, incluso, sólo podría llevarse adelante en forma consecuente dismantelando gran parte del aparato del Estado, del cual la exSide es una pata fundamental. Choca con los límites del carácter de clase del Estado.

Como ocurre con la cuestión de la deuda, mientras el gobierno denuncia el "megaendeudamiento" macrista, rescata la deuda impagable, arreglando con los bonistas la continuidad del pago. Aquí, la denuncia de la AFI "macrista" está puesta al servicio de garantizar la continuidad de estos aparatos de conspiración.

Para la izquierda, que nuevamente aparece como una de las víctimas del espionaje, el cese de toda actividad de espionaje y el dismantelamiento de la AFI y de todo el aparato estatal que se apoya en ella, va de la mano de un programa integral contra la represión: el dismantelamiento de los aparatos represivos, el juicio y castigo de todos los responsables de la represión policial e institucional, la derogación de la ley antiterrorista y toda la legislación represiva, así como el levantamiento de las causas contra los luchadores populares.

Juan García

El diálogo Felipe Solá-Mike Pompeo

La buena sintonía entre la Casa Rosada y la Casa Blanca

Un hecho que pasó relativamente desapercibido es la reciente videoconferencia mantenida por el canciller argentino Felipe Solá con su par norteamericano Mike Pompeo. Ambos funcionarios destacaron la buena "sintonía" entre ambos gobiernos, lo cual llama más la atención porque se da en momentos en que estamos frente a la rebelión popular que estremece a Estados Unidos y el mundo con motivo del asesinato de George Floyd. Recordemos que el gobierno argentino mantuvo un silencio sepulcral sobre el punto. No hubo un pronunciamiento y menos una condena del crimen. Obviamente, tampoco formó parte de la agenda en la "cordial" conversación entre los representantes de ambos países.

El encuentro fue dado a conocer por el funcionario del gobierno de Donald Trump, quien calificó las relaciones con la Argentina como de "socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio". También se destacó desde el Departamento de Estado que en la charla de ambos cancilleres se habló del "desarrollo económico regional, incluidas las negociaciones de deuda en curso de Argentina". Fuentes del gobierno



argentino señalaron que se trató de una reunión por videoconferencia "muy positiva", que pretende delinear una agenda común con vistas a los tiempos post pandemia.

La "buena onda" se explica porque el gobierno argentino está a punto de cerrar un arreglo con los bonistas, cediendo a las pretensiones de los fondos de inversión. Mientras se viene batiendo el parche sobre una política soberana y autónoma en el manejo de los asuntos del país, lo cierto es que el gobierno argentino se recostó en los buenos oficios del FMI, en el gobierno norteamericano y de las principales potencias europeas, mientras se fue desarrollando la renegociación de la

deuda. Con semejantes aliados -que son ni más ni menos que los representantes del capital internacional- no se puede esperar otra cosa que el actual desenlace perjudicial para los intereses nacionales.

A la par del rescate de la deuda, Argentina ya viene rindiendo tributo a las exigencias y dictados norteamericanos. Alberto Fernández viene de revisar su negativa a los tratados de libre comercio con Surcorea y Canadá, respondiendo a las presiones de los presidentes vecinos, aunque esto implica prácticamente la defunción del Mercosur. Detrás de esto viene también el tratado con Estados Unidos, que formó parte de las con-

versaciones de ambos cancilleres. Recordemos que Alberto Fernández ya había dado otras señales, permitiendo el ingreso de tropas extranjeras, dando visto bueno a los ejercicios conjuntos con la flota yanqui. Y la aceptación del golpe boliviano, dando reconocimiento al personal diplomático en la Argentina nombrado por Jeanine Añez. La Argentina, rompiendo la promesa de la campaña de Fernández, no se retiró del grupo Lima. La buena letra de la Casa Rosada no sirvió, sin embargo, para lograr el levantamiento de los aranceles impuestos al biodiésel argentino ni para influir en la decisión judicial respecto del litigio que tiene YPF por la nacionalización de la empresa, que va a ser finalmente ventilado en el ámbito de los tribunales norteamericanos.

La agenda de la teleconferencia incluyó también la cuestión de Venezuela. El comunicado de Washington señala que se pasó revista a "los esfuerzos regionales para restaurar la democracia en Venezuela." Respecto de este punto, Solá le dijo a Pompeo que la "Argentina está a favor de una solución pacífica, política y negociada por los propios venezolanos, que garantice el funcionamiento de sus instituciones y asegure su convi-

vencia en paz, sin presiones ni condicionamientos externos". Aunque Argentina formalmente mantiene su postura de "no injerencia" en los asuntos internos del país caribeño, Felipe Solá, con el guiño de Fernández, ya había interpuesto sus buenos oficios para armar una transición ordenada que culmine con el relevo de Maduro -o sea, un variante golpista, más elegante. Importa señalar que, en estos meses, la Cancillería se ha mandado guardar frente a desplazamiento de la flota norteamericana a las costas venezolanas. No hubo ningún reclamo y, por supuesto, tampoco formó parte de las conversaciones de días atrás.

La política exterior, como se suele señalar usualmente, es una prolongación de la política interna. Y en este caso está hecha a medida del rescate de los bonistas. El siguiente paso es el plan económico que deberá negociarse con el Fondo y que reclaman los acreedores para asegurarse el pago de la deuda. Aunque se dice entrelíneas, el tema estuvo presente en la teleconferencia. El diálogo Solá-Pompeo prepara el terreno para el desembarco del FMI en Argentina.

Pablo Heller

El gobierno de Alberto Fernández acaba de presentar el proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la movilidad jubilatoria y seguir con los decretazos.

Estos decretos han llevado a que en marzo se otorgara un 2,3% más una suma de 1.500 pesos para la mínima y aumentos de porcentaje decrecientes que sacaron 5.000 millones de pesos mensuales de los bolsillos de los jubilados. En junio, otro decreto otorgó el 6,12%, rebajando casi la mitad de lo que hubiera correspondido.

Si se hubiera aplicado la fórmula anterior, basada en la inflación y en la variación salarial, en marzo hubiera correspondido 11,56% para todos los jubilados y en junio 10,91%. Un 23% acumulado, que ha sufrido un cercenamiento del 5 al 14%, según el monto jubilatorio.

Es bueno recordar que el 23% que debió aplicarse es reparatorio de la inflación del último semestre del año pasado. Es decir que sobre la inflación de este semestre de 2020, que acaba a fin de junio, la compensación sobre la inflación ha sido cero. Contra el relato "nacional y popular" de que a los jubilados les están dando más aumento que la inflación.

En la presentación judicial encarrada por la Defensoría de la Tercera

Rechacemos la nueva suspensión de la movilidad jubilatoria

Que no pase la ley enviada al Congreso

Edad, que adicionó una ampliación a la demanda colectiva presentada en marzo, se cuestionó la suspensión de la movilidad, ya que con esto los jubilados perdieron entre 541 y 14.022 pesos, según los distintos niveles de ingresos, desde los más bajos a los más altos (*Infobae*, 5/6).

La anulación de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno, concretada a pocos días de la asunción presidencial de Fernández, con lo cual se avanza en la abolición de todo vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores en actividad (salario diferido) y consolida una pérdida anual enorme. Es una regresión, una desvalorización aún mayor a las de por sí miserables jubilaciones.

Como muestra se puede ver: lo que en mayo era de 15.892 pesos, por el decreto pasó a 16.864 y debería haber sido de 17.403. Una jubilación de 20.000 pesos pasó a 21.224 en junio y debió haber sido de 22.371. En el caso de una que en mayo era de 106.934 pesos, por de-

creto cobra en junio 113.478 y debería haber cobrado 127.498 por la movilidad anterior (abogados Bernabel & Asociados).

En el nuevo proyecto presentado, el gobierno plantea la continuación de la suspensión de la movilidad y en sus fundamentos aparece la excusa de la pandemia y con todo descaro que se pagaron las ATP (medio sueldo de cada trabajador de empresas que argumenten caídas económicas), por el cual se exime a las patronales de hacer los aportes y se han otorgado préstamos a tasa cero.

Es decir, Alberto Fernández; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; Sergio Massa y Cristina Kirchner se consideran con atribuciones y derechos para usar los fondos jubilatorios para rescatar y subsidiar a los patronales, a los capitalistas como los Techint, Clarín, Aluar, Coca-Cola y compañía, mientras imponen una nueva suspensión del derecho adquirido

emergente de la movilidad establecida en la Ley 27.426.

Cuentan con la complicidad de las direcciones sindicales de la CGT y CTA, cuyas intervenciones son relativas a apoyar la política del gobierno en las negociaciones de la deuda con el FMI, que incluyen los recortes jubilatorios, así como las rebajas de sueldo del conjunto de los trabajadores o para reclamar salvatajes a las patronales. Todo lo cual está impactando de lleno en el sistema jubilatorio, creándole un estrés que lo coloca al borde del colapso.

Es claro que las exigencias de los banqueros y el FMI están en la motivación de fondo de estas medidas. El ajuste está en marcha y nosotros, los jubilados, en el centro de ese ajuste. Como lo expresa una hermosa canción: "El dinero de los jubilados está financiando las balas de la policía racista en Estados Unidos".

Se plantea la intervención de los trabajadores jubilados y los trabajadores activos para rechazar este nuevo robo. Defendiendo la

movilidad, apoyando el amparo colectivo, reclamando el 82% móvil, los 45.020 pesos de mínima, defendiendo las cajas provinciales y los regímenes especiales que también quieren ser considerados en la reforma previsional en marcha, como lo muestra Córdoba.

Se impone, junto a este programa, la restitución de los aportes patronales, la devolución de todas las deudas del gobierno con la Anses y terminar con el trabajo en negro y con las rebajas salariales. Anses y las demás cajas no pueden estar en manos de los voraces funcionarios al servicio de sortear el derrumbe fiscal con la plata de los jubilados. Otros son los lugares donde buscar recursos para enfrentar la pandemia: el no pago de la deuda o un impuesto a las grandes rentas y fortunas. Por eso, la Anses y las demás cajas deben ser administradas por trabajadores y jubilados, sus dueños. Los jubilados vamos también por estos objetivos de conjunto.

El 16 de junio, en la jornada nacional de lucha decidida por el Plenario Sindical Combativo, estos reclamos estarán en primera línea, del mismo modo que se hará desde la banca del FIT-U. Los jubilados cordobeses ya empezaron a ganar la calle. Marcan el camino.

Nora Biaggio

La economía mundial que se viene

“Los trabajadores van a estar más jodidos”

Esta expresión pertenece a Nouriel Roubini, el economista reconocido mundialmente por haber anticipado la crisis financiera de 2008, precipitada con la caída de Lehman Brothers y hombre de consulta del establishment internacional, quien en declaraciones recientes hace un retrato descarnado de lo que se viene. “Nos llevó diez años, entre 2009 y 2019, crear 22 millones de empleos. Y hemos perdido 30 millones de empleos en dos meses”.

Recordemos que el diario inglés *Financial Times*, por boca de su columnista estrella, Martin Wolf, venía de pintar un cuadro similar, caracterizado por una depresión mundial de grandes dimensiones.

A diferencia del optimismo que reina en los círculos financieros y de negocios que hablan de una crisis pasajera, en el marco de la nueva euforia bursátil que reina en Wall Street, el economista nos traza un panorama sombrío, en que lo peor no está para atrás, sino para adelante.

La visión de Roubini es que marchamos a una recuperación mediocre y una depresión global. Los mercados, según su punta de vista, están subiendo porque hay un estímulo monetario masivo y fiscal masivo. El boom bursátil no tiene relación alguna con la producción y la economía real.

La salida de la pandemia va estimular que ciertos sectores que conservan un poder adquisitivo y venían absteniéndose en su consumo, empiecen a gastar más. Pero esto tiene patas cortas. Los incentivos no se prolongarán por mucho tiempo. Los subsidios por desempleo, por lo pronto, expiran en julio en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha salido exultante a señalar un descenso en la tasa de desempleo, pero ya hay muchos analistas que cuestionan esa cifra, pues incluye como personal ocupado aquel que está suspendido. Como es sabido, muchas de esas suspensiones son la antesala de despidos. La tasa de desempleo en Estados Unidos es del 13,3% -o sea, más de un 33% por encima que en el pico más alto de la crisis de doce años atrás. Y si se incluye a aquéllos que desean trabajo a tiempo completo pero no pueden conseguirlo, entonces, la tasa de desempleo es del 21%, y hay que sumar a otros 3 millones de personas que no fueron clasificadas, por lo que la tasa de desempleo total en mayo sería más del 25%.

La nueva normalidad

Aunque esto se revierta parcialmente, los millones que vuelvan



a ser recontratados, lo serán bajo condiciones muy diferentes a la actuales. En lugar de un empleo formal y beneficios sociales completos, va a empezar a abrirse paso el contrato “por hora, a tiempo parcial sin beneficios y con un salario bajo”, que coexistiría con legiones de desocupados sin ingresos de ningún tipo. Este fenómeno ya estuvo presente en la década siguiente a la crisis de 2008, en que la recuperación se dio sobre la base trabajo precario y más barato, incluyendo a las corporaciones. En las automotrices, bajo el mandato de Barack Obama, los nuevos trabajadores fueron contratados por la mitad el sueldo del personal más antiguo. Roubini resume este panorama con una sentencia contundente: “Hay un conflicto entre trabajadores y capital. Durante una década, los trabajadores han sido jodidos. Ahora, van a estar más jodidos”.

No olvidemos que las empresas están tan altamente endeudadas, que necesitan “reducir costos, y el primer costo que se corta es la mano de obra”. Esta reducción tan drástica de desempleo y trabajo precario, según su óptica, va a poner un freno a la demanda y se transformará en un escollo para abrir una perspectiva de reactivación. El optimismo inicial en círculos empresarios de una recuperación en forma de V han empezado a ceder a otros más cautelosos en forma de U.

En este contexto, según Roubini, los estímulos que viene implementado el Estado no van a evitar quiebras masivas. “Las pequeñas empresas van a desaparecer en la economía posterior al coronavirus”. Roubini llama la atención de que el rescate tiene como destinatario y beneficiario al gran capital.

Incluso las personas de ingresos medios, dada la conmoción

que acaba de ocurrir, aunque puedan tener haber un mayor consumo inicial, van a actuar con cautela y reservar más ahorros por precaución. Y reducir el gasto discrecional, en especial de bienes más caros como la compra de una casa o un auto. Cuarenta por ciento de los estadounidenses tienen menos de 400 dólares en efectivo líquido ahorrado para una emergencia. Está claro que no hay margen para una recuperación de largo aliento sobre esta base.

La recuperación económica que se produzca, inclusive, según la óptica del economista, ni siquiera asegura un crecimiento del empleo. Debido a que los costos laborales son más altos en Estados Unidos que sus rivales asiáticos, la tendencia que predomine, según su mirada, sea sustituir mano de obra por capital (maquinarias). Con las relocalizaciones de las empresas en suelo americano, que hoy están instaladas en el exterior, los estadounidenses comunes van a ser víctimas de la carestía (precios de consumo más altos), sin disfrutar de los beneficios aparentes (más oportunidades de trabajo y salarios más altos). De todos modos, esta hipótesis de Roubini está por verse, pues, es altamente improbable que las filiales de las corporaciones vuelvan a radicarse en Estados Unidos y menos aún que se produzca un incremento sensible de la tecnificación y productividad en momentos que estamos frente a una huelga de inversiones productivas, ante la crisis de sobreproducción y la declinación de los beneficios, que van a tender a agravarse sensiblemente en el próximo período.

Roubini va más lejos y plantea que Estados Unidos va a “comenzar a tener disturbios por la

comida “Las pocas tiendas que están abiertas, como mi Whole Foods, tienen guardias de seguridad, tanto dentro como fuera. Estamos a un paso de los disturbios alimentarios”. Esos comentarios fueron hechos por Roubini antes del estallido de las protestas por el asesinato de Floyd, pero basta tener presente este panorama para advertir que la explosión actual es inseparable de los estragos que viene provocando la crisis capitalista y la pandemia que golpea con más fuerza los sectores más vulnerables, empezando por la población negra y las minorías.

Guerra fría y guerra caliente

No está ausente en el análisis del economista el escenario de guerra comercial e incluso la emergencia de conflictos bélicos. Roubini habla del comienzo de una “guerra fría” entre Estados Unidos y China. “Ahora, tenemos una guerra comercial a gran escala, guerra tecnológica, guerra financiera, guerra monetaria”.

Estamos asistiendo, a un “desacoplamiento completo”, lo que lleva a una fractura del comercio internacional y de las cadenas de suministros y valor que están altamente integradas a escala global. Las autoridades norteamericanas decidieron que Huawei no tendrá acceso a semiconductores y tecnología en Estados Unidos. Están imponiendo restricciones totales a la transferencia de tecnología de Estados Unidos. Esto abre una escalada de alcances imprevisibles en la que el economista no descarta el uso de la fuerza.

“El único debate es sobre si habrá una guerra fría o una caliente. Históricamente, estas cosas han llevado a una guerra caliente en 12 de 16 episodios en 2.000 años de historia”. Esto confirma lo que venimos sosteniendo desde el Partido Obrero: el impasse capitalista nutre las tendencias a la guerra. Estamos frente a la tentativa del imperialismo de superar este empantanamiento, sometiendo a China y el ex espacio soviético, avanzando en su colonización. La guerra, por un lado, y la revolución, por el otro, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del capitalismo.

Recesión con inflación

El economista, asimismo, lanza una voz de alerta sobre los alcances explosivos que podría tener los actuales planes de estímulo. La emisión gigantesca, aunque en

lo inmediato sus efectos queden mitigados por la actual retracción económica, podría terminar provocando un rebrote en la carestía. Estaríamos frente a una tormenta perfecta de una depresión con inflación. Esto, por supuesto, representaría un golpe para los bolsillos populares pero, al mismo tiempo, un escenario de esa clase obligaría a un aumento de la tasa de interés, lo que haría estremecer al conjunto de la economía altamente endeudada, que ha logrado prolongar su agonía gracias al crédito barato, con tasa de interés cercana a cero. “Hay tanta deuda, que si las tasas a largo plazo van de 0 a 3%, la economía va a colapsar”.

Los trabajadores deben tomar nota sobre el escenario que se expone, lo cual es más elocuente viniendo de un hombre de confianza de los círculos de poder. Tenemos un retrato descarnado sobre el hundimiento del capitalismo y los límites insalvables del salvataje en curso. No obstante ello, Roubini apela a echar mano al intervencionismo estatal y a las viejas recetas keynesianas monetarias y fiscales, cuyas contradicciones, sin embargo, él mismo se encarga de demoler en sus reflexiones. Marchamos a una depresión mundial, que va a ir de la mano de sacrificios y privaciones inauditas contra las masas, mientras la pandemia sigue golpeando, en primer lugar, sobre la población más vulnerable.

Estas penurias en el mundo empiezan a despertar las rebeliones de los pueblos. Es así como se desarrolla, ahora en el corazón del capitalismo mundial, una extraordinaria rebelión popular, que no se circunscribe al repudio de un crimen racial ejecutado por el aparato policial, sino que plantea la impugnación de todo un régimen político, económico y social y la reorganización del planeta sobre nuevas bases sociales.

La rebelión en Estados Unidos tiene un punto de contacto y recoge el hilo de las rebeliones que estremecieron a Latinoamérica y que tuvieron su réplica en otras geografías del planeta. Estas rebeliones ponen de relieve el abismo que separa a los trabajadores, de un lado, y los capitalistas y sus gobiernos, del otro, y pone al rojo vivo la cuestión crucial de dirimir quién va a asumir los costos de la bancarrota capitalista.

Pablo Heller